

Globethics Repository



Los desafíos de la reforma social en Brasil [The challenges of social reform in Brazil]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Tavares de Almeida, Maria Hermínia
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-09-16 04:12:38
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218866

Los desafíos de la reforma social en Brasil

Continuando con el cambio

Las iniciativas de política social del gobierno de Lula se inscriben entre el cambio y la continuidad. Luego de las consignas de campaña, cuando oponerse a la gestión anterior era políticamente necesario, la nueva administración ha encontrado un panorama de reformas en curso que viene desde la democratización. Para el análisis hay dos casos emblemáticos: la reforma previsional (a la que el PT se opuso cuando no era gobierno pero con la que se ha comprometido) y el programa Hambre Cero, que parte de un diagnóstico social equivocado y que ha tenido serios problemas de implementación. De todos modos puede preverse que el gobierno de Lula estará a la altura de sus desafíos sociales.

Maria Hermínia Tavares de Almeida

Luiz Inácio «Lula» da Silva fue electo presidente bajo la bandera de los cambios. Los hubo, por lo menos en el campo político. El Partido de los Trabajadores accedió al poder y con ello por primera vez en la historia del Brasil una coalición de centroizquierda enfrenta el desafío de ser gobierno. En los ocho primeros meses, se asistió a una gigantesca sustitución de elites políticas y cuadros administrativos en todos los organismos federales. Se trata de la primera

Maria Hermínia Tavares de Almeida: profesora del Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de San Pablo; @: <mhbtdalm@usp.br>.

Palabras clave: políticas sociales y asistenciales, reforma previsional, Hambre Cero, Brasil.

gran transformación desde que los militares entregaron el poder a la oposición civil en 1984.

Habiendo transcurrido el tiempo, sin embargo, resulta claro para decepción de algunos y alivio de otros que las políticas gubernamentales no presentan demasiados cambios. En el frente macroeconómico la continuidad es clara y asumida, pero de alguna manera también existe donde el nuevo gobierno imaginaba transformar muchas cosas: en el terreno de las políticas sociales. O mejor dicho, probablemente los cambios continúen en la misma dirección que las iniciativas del gobierno anterior. La gestión de Lula no parte de cero, más bien hereda una amplia agenda de reforma social, construida y paulatinamente implementada desde la democratización; no propone una agenda nueva, aunque pueda innovar en algunas soluciones.

Este artículo describe y discute las primeras iniciativas del Gobierno en el área social, tratando de indicar los desafíos, las limitaciones y las oportunidades. Para situar adecuadamente el tema, haremos en la primera parte una breve presentación de las experiencias previas de reforma social, en especial durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso; en la segunda parte discutiremos las propuestas de la actual administración; y en la tercera sus principales iniciativas.

Una década y media de reformas

Democracia y justicia social fueron los grandes lemas del movimiento de oposición al régimen militar. El «rescate de la deuda social» era la fórmula que sintetizaba la aspiración de que la redemocratización trajera la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales, dos llagas que 40 años de vertiginoso desarrollo económico no fueron capaces de eliminar. Entre 1950 y 1980, el producto interno bruto real creció 8,4 veces, mientras el PIB real por habitante se expandió 352,2% (Garcia), pasando de 1.917 a 6.510 reales, a precios de 2002 (Ipeadata). Sin embargo, en 1981 cerca de 19% de la población estaba por debajo de la línea de indigencia y 43,2% –50.710.000 personas– por debajo de la de pobreza (Ipeadata). En el mismo año, Brasil exhibía un coeficiente Gini de 0,587, y el 1% más rico de la población se apropiaba de 12,71% de la renta, mientras el 20% más pobre se quedaba solamente con 2,62% (Ipeadata).

El diagnóstico consensual hecho por las fuerzas democráticas atribuía la responsabilidad por aquella situación, de un lado, a la política económica de los gobiernos militares –especialmente a la política salarial–, y por otro, a la natu-



raleza perversa y regresiva de las políticas sociales. La centralización de las decisiones y recursos en el plan federal, la ineficacia del gasto social, la superposición y fragmentación de los programas y su apropiación por los grupos medios, y la mala calidad de los servicios y bienes ofrecidos a los más pobres, hacían del sistema de protección social brasileño un mecanismo de reproducción de las desigualdades que supuestamente debía reducir.

A partir de ese diagnóstico fue armándose una agenda de reforma social estructurada en torno de varios principios: universalización de los servicios sociales básicos, vistos como derechos de la ciudadanía; descentralización; garantía de flujos continuos de recursos hacia los programas; creación de acciones de emergencia para grupos vulnerables; y control social sobre las acciones del Gobierno. Estos principios fueron incluidos en la Constitución de 1988. La agenda de reforma del sistema de protección social nació inconclusa, y solo fue una construcción política y social que incluyó debates, conflictos y duros aprendizajes para muchos actores: gobiernos de los tres niveles, sectores opositores, organi-

***Los gobiernos
anteriores
y especialmente
la administración
Cardoso
avanzaron mucho
en la reforma
del sistema de
protección social***

zaciones sociales. Por otro lado, como lo demostró Draibe, la agenda fue enriqueciéndose tanto con nuevos temas como con nuevas formas de pensar viejos temas, a lo largo de la década de los 90 (Draibe; Draibe et al.). Las reformas previsional, asistencial, básica de salud, educacional, habitacional y contra la pobreza extrema eran sus puntos centrales. La reforma del sistema de protección social requería de cambios institucionales, legislativos o, en muchos casos, constitucionales. También implicó, en los casos de la salud, asistencia social y educación, transferencia de competencias y responsabilidades del Gobierno Federal –y, en menor medida, de los gobiernos estatales– a los municipios, o la construcción de mecanismos de cooperación entre los tres niveles de gobierno.

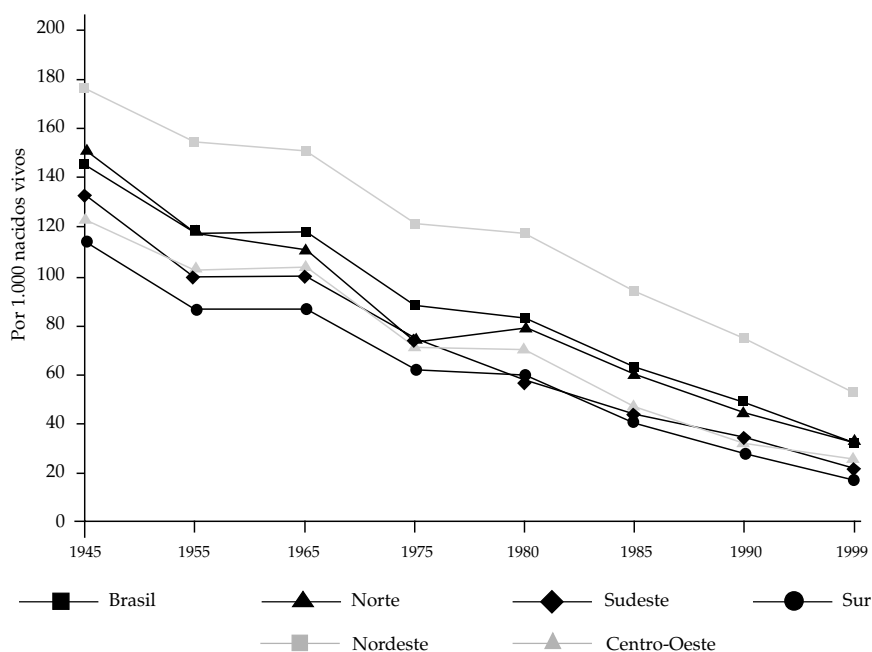
Al contrario de lo que afirmaba el PT mientras estuvo en la oposición, los gobiernos anteriores y especialmente la administración Cardoso avanzaron mucho en la reforma del sistema de protección social. En el terreno de las políticas sociales universales, las grandes conquistas se produjeron en salud y educación. En ambos casos, importantes cambios institucionales desataron los nudos que trababan la descentralización de los servicios, facilitando la cooperación entre el Gobierno Federal, los estados y los municipios. Los mecanismos automáticos de transferencia de recursos redujeron la influencia de la negociación política fraudulenta y del clientelismo. Poco a poco nuevos instrumentos de acompañamiento y evaluación mejoraron la eficiencia del gasto, del desempeño de la escuela, del centro de salud y de muchos programas en dichas áreas.

En materia de saneamiento básico y de vivienda popular, el Gobierno quedó debiendo un modelo de intervención pública adecuado. Por eso se hizo poco en el área de políticas urbanas. Del mismo modo, la reforma del sistema previsional, adelantado por la administración Cardoso con el objeto de corregir su regresividad y de lograr el equilibrio financiero, resultó bastante limitada. Se restringió a cambios en las jubilaciones del sector privado y no tocó lo esencial: la distribución injusta de beneficios entre servidores públicos y empleados del área privada. El sistema previsional, que absorbe cerca de 63% del presupuesto social del país, siguió estando lejos de ser un instrumento de reducción de las desigualdades sociales.

Finalmente, en el campo de las políticas sociales focalizadas en los segmentos más pobres y vulnerables, se produjeron avances significativos y en varias di-

recciones. La descentralización de la asistencia social para los municipios fue realizada con éxito. Los beneficios asistenciales aumentaron, especialmente para las poblaciones rurales. Se crearon nuevos programas de transferencia de ingresos, muchos de ellos concebidos como componentes de una verdadera red de protección social: beca escolar, erradicación del trabajo infantil, auxilio-gas, programa de salud de la familia, programa de apoyo a la agricultura familiar, además del Proyecto Alborada para los 2.361 municipios donde es mayor la concentración de brasileños situados por debajo de la línea de pobreza. La Comunidad Solidaria, programa creado y comandado por Ruth Cardoso, experimentó nuevas formas de articulación entre ministerios y organizaciones de la sociedad civil, y definió un papel inédito –no convencional– para la primera dama. Por su parte, en los nuevos programas de transferencia de ingresos faltó establecer instrumentos de acompañamiento y de evaluación que permitieran

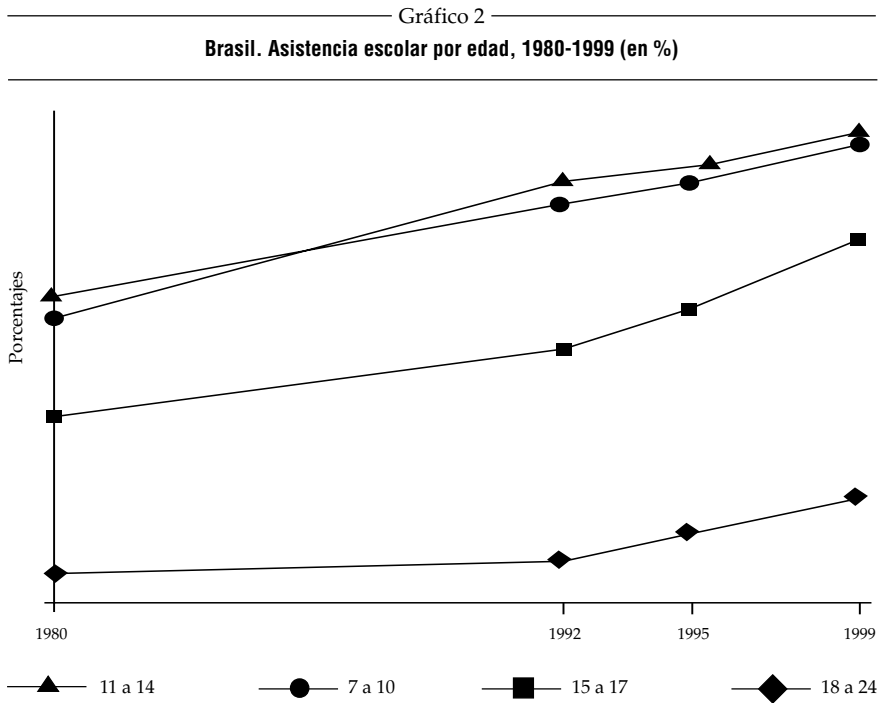
Gráfico 1
Tasas de mortalidad infantil. Brasil y regiones (1945-1999)



Fuentes: Fundação IBGE (estimativas 1945-1990); Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde - Funasa/Centro Nacional de Epidemiologia - Cenepi. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc e Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM; Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa (datos de 1999).

medir su eficacia en la reducción permanente de la pobreza. Durante los ocho años de la administración Cardoso, fueron también significativos los esfuerzos de reforma e innovación social en los estados y municipios, gerenciados por los más diferentes partidos, incluyendo al PT.

Como consecuencia de todo esto el país logró una proeza: los indicadores sociales mejoraron, aunque un crecimiento económico mediocre mantenga elevado el desempleo y limite las posibilidades de aumento de la renta de los más pobres. La mortalidad infantil, que ya venía declinando, se redujo en más de 38% entre 1990 y 2000, como se observa en el gráfico 1. Hubo una ampliación efectiva del acceso de los ciudadanos a los servicios de salud, yendo hacia la universalización. Asimismo se completó la descentralización de la atención básica: en 2001, 90% de los 5.531 municipios brasileños ya habían asumido la gestión plena de la red de atención básica. Por su parte la asistencia escolar creció en todos los grupos etarios. La enseñanza básica prácticamente se universalizó, como se puede observar en el gráfico 2.



Fuente: Censo Escolar 2001.

Las profundas desigualdades de escolarización entre los más ricos y los más pobres, como entre blancos y negros, también se redujeron. Entre 1992 y 2001, la tasa de asistencia del sector 20% más pobre aumentó de 74,5% a 94,2%, con ello, la distancia que separa la escolarización de 20% más pobre de aquella de 20% más rico, se redujo de 22,7%, en 1992, a apenas 5% en 2001. Entre blancos y negros de 7 a 14 años, la distancia cayó de 12% a 4%. La universalización de los primeros cuatro años de educación básica derivaron en cuestiones más complejas para el primer plan, tales como la necesidad de garantizar la permanencia y la progresión de los estudiantes en los ocho años de básica, la necesidad de mejorar en general la calidad de la enseñanza, y el problema de la educación continua de la inmensa cantidad de adultos con bajísima escolaridad.

***El PT
no pareció
formular
para después
de la campaña
un diagnóstico
más elaborado
acerca de
los desafíos en
el área social***

Pero los significativos éxitos obtenidos no excluyen la persistencia de la pobreza y la desigualdad. En 2001, el porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza, aunque menor que hace 20 años, era todavía muy alto: 33,6%. Esta proporción incluía 14,6% situado por debajo de la línea de indigencia (Ipeadata). En 2000, el coeficiente Gini no solo permanecía elevado (0,609) sino aun algo superior al de 1981. Los efectos combinados de la pobreza y la desigualdad fueron particularmente devastadores en las regiones metropolitanas y en las grandes ciudades, donde alimentaron la desorganización familiar, la violencia y la criminalidad.

De la tribuna al Gobierno

El cambio prometido por el PT y su candidato presidencial fue formulado de manera vaga. Pero, por la fuerza de la imagen de uno y otro, adquirió un contenido social preciso. Significaba sobre todo la reducción sustancial de la pobreza y la desigualdad, la inclusión plena de los millones de pobres. Uno de los temas centrales de la campaña fue la creación de empleos, que se haría posible con cambios en la política económica, apuntando a retomar el crecimiento sostenible. En el terreno de las políticas sociales propiamente dichas, poco se habló durante la disputa electoral, como normalmente ocurre en tales circunstancias.

En realidad, el PT no pareció formular para después de la campaña un diagnóstico más elaborado acerca de los desafíos en el área social, capaz de obtener consenso partidario y de fundamentar prioridades claras de acción. Ello pese a

la identificación original con la bandera del cambio y de la inclusión social, y del numeroso contingente de intelectuales y especialistas de que dispone. En el periodo preelectoral, la única propuesta más detallada hecha pública fue el «Proyecto Hambre Cero –una propuesta de política de seguridad alimentaria

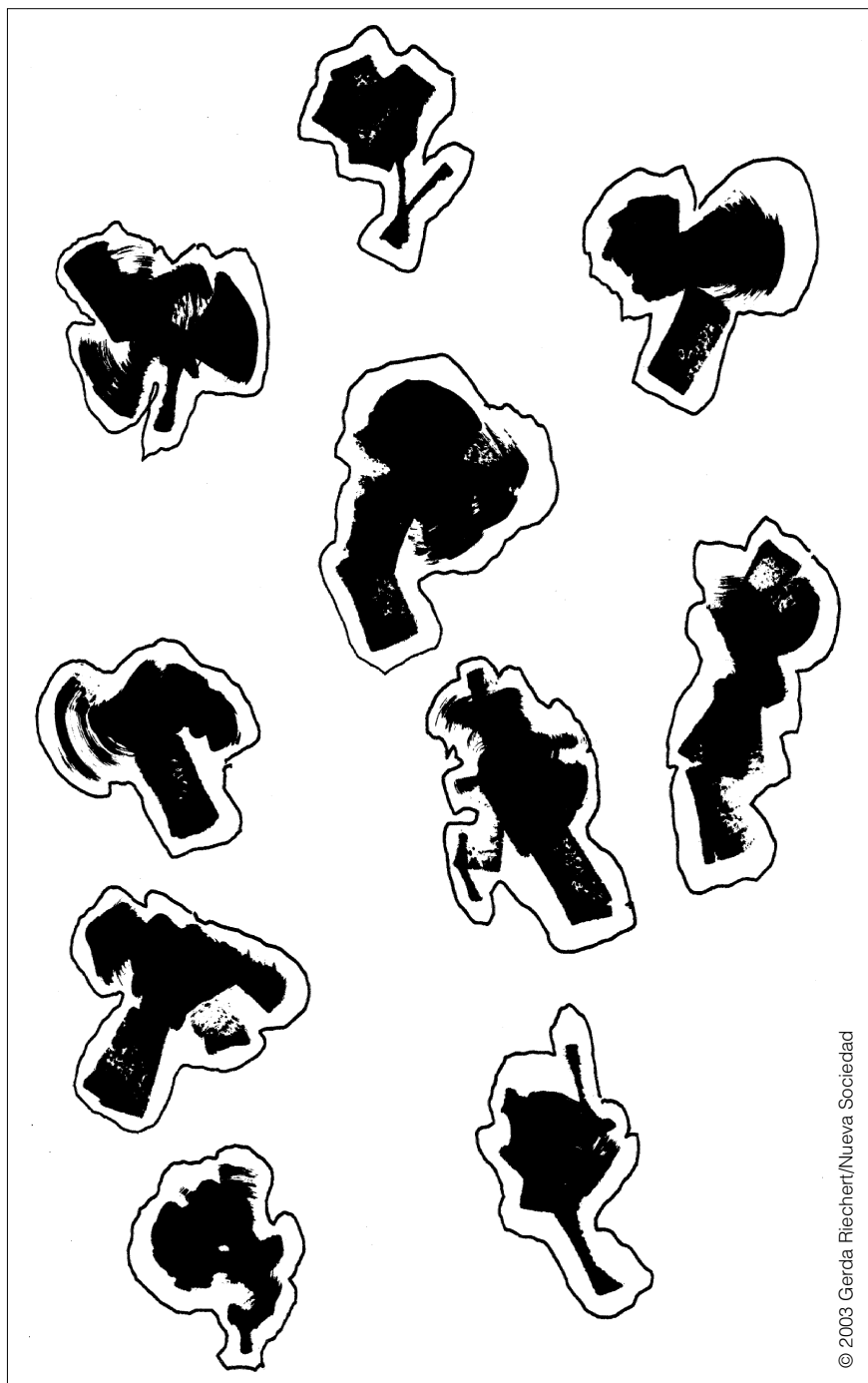
***Si la reforma
previsional
ha constituido,
hasta el momento,
un éxito inequívoco
del Gobierno,
no puede decirse
lo mismo
del programa
Hambre Cero***

para Brasil», elaborado en 2001 por un equipo de 45 investigadores del Instituto Ciudadanía, *think tank* petista, bajo la orientación del ahora ministro de Seguridad Alimentaria y Combate contra el Hambre, Joses Graziano da Silva.

El programa Hambre Cero contemplaría tres grandes conjuntos de iniciativas: 1) políticas estructurales: generación de empleo e ingresos, asistencia social universal, incentivo a la agricultura familiar, intensificación de la reforma agraria, becas-escuela e ingreso mínimo; 2) políticas específicas: programa de cupón alimentario (luego sustituido por una asignación directa de 50 reales para cada beneficiario, por medio de la tarjeta alimentaria), donaciones de cestas básicas de emergencia, mantenimiento de existencias de seguridad, cantidad y calidad de alimentos, ampliación del Programa de Alimentación del Trabajador, combate a la desnutrición infantil y materna, ampliación de la merienda escolar, educación para el consumo y educación alimenticia; 3) políticas para áreas rurales, pequeñas y medianas ciudades, y metrópolis, con una serie de medidas que incluyen, en los dos últimos casos, bancos de alimentos integrados por donaciones.

La propuesta resultaba ambiciosa, requiriendo la articulación de varios ministerios, responsables de políticas y programas específicos, y de diferentes niveles de gobierno. Por otro lado el plan suponía, equivocadamente, que el principal problema de los pobres brasileños es la falta de comida, cuando se sabe que la desnutrición y el hambre crónica alcanzan apenas a un reducido sector de los millones de pobres, quienes más que alimentos precisan de servicios públicos –salud, educación, saneamiento– con un mínimo de calidad, viviendas decentes e ingresos suplementarios para cubrir otras necesidades.

El primer documento más extenso sobre los rumbos del gobierno de Lula con propuestas de política social, «Política económica y reformas estructurales», fue producido por el Ministerio de Hacienda y divulgado inmediatamente después de la posesión de mando. Allí la reforma previsional tiene un lugar destacado en el capítulo sobre el equilibrio fiscal a largo plazo. Sus objetivos son re-



componer el equilibrio del sistema de pensiones, garantizando su solvencia a largo plazo; disminuir la presión sobre los recursos permitiendo el rescate de la capacidad de gasto público; aumentar la equidad reduciendo las distorsiones en las transferencias realizadas por el Estado. El tema de las políticas sociales hace hincapié en la reducción de sus efectos regresivos, gracias a un aumento de la eficacia del gasto social y de la efectividad de los programas y acciones, a través de una mejor focalización en los grupos de menores ingresos¹. El documento carece de diagnósticos precisos sobre las otras políticas universales –educación básica, salud y saneamiento– además de la previsional, que pudieran servir de base para la definición de directrices y prioridades de acción. Este texto, que guardaba gran semejanza con «La agenda perdida»², ni de lejos obtuvo consenso entre los partidarios del PT. De hecho reflejaba más las opiniones del equipo del ministro, integrado por uno de los autores de la Agenda, que las de una parte significativa de los cuadros y de la intelectualidad petista. Por esta razón suscitó la crítica feroz de un grupo de intelectuales ligados al Gobierno.

Los primeros pasos del Gobierno

Las dos primeras iniciativas de Lula fueron la propuesta de reforma previsional y la creación de un programa más de transferencia condicionada de ingresos, el Hambre Cero. El proyecto de reforma previsional, aún en trámite parlamentario, ha sido retomado en el punto donde el gobierno de Cardoso había fracasado. Su objetivo es el cambio del sistema de jubilaciones y pensiones de los empleados públicos. Las propuestas contenidas son mucho más duras que las presentadas por Cardoso y derrotadas en su momento en el Congreso, donde tuvieron no solo la oposición del PT, que las consideraba de inspiración neoliberal, sino también la de parte del sustento partidario del gobierno de entonces. Los cambios presentados por la actual administración elevan la edad de jubilación, introducen el aporte jubilatorio para los pensionados, reducen los beneficios de los empleados públicos y extinguen la jubilación con salario integral para los futuros funcionarios, igualando el patrón de sus beneficios con el de los trabajadores

1. El documento dice: «La poca capacidad de los gastos sociales de la Unión para reducir la desigualdad de ingresos se origina en el hecho de que buena parte de los recursos se dirige a los no pobres, así como en la gestión ineficiente de los recursos destinados a los programas sociales. La falta de evaluación específica de los impactos de esos recursos sobre la población beneficiada contribuye en forma decisiva a este problema. ... Además, es necesario reformular el diseño de las políticas de recaudación y transferencia del Estado para reducir la desigualdad. ... El diseño de estas políticas podrá ser muy efectivo para redistribuir ingresos, según lo verificado en otros países» (Ministerio de Hacienda, 2003, p. 15).

2. Texto preparado por un grupo de economistas de orientación liberal, bajo la coordinación de Alexandre Scheinkman, de la Universidad de Princeton, y presentado como contribución al debate durante la campaña electoral de 2002.

del sector privado; establecen, por fin, un régimen previsional complementario de carácter aún no claramente definido.

La reforma, propuesta en nombre de la equidad y del equilibrio financiero del sistema previsional, aprobada ya en primera votación en la Cámara de Diputados, implica una reducción drástica de los beneficios hasta ahora recibidos por los segmentos más elevados del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por esta razón ha provocado una fuerte oposición de los máximos exponentes del Poder Judicial, de las universidades públicas y de los sindicatos del sector público, tradicionalmente controlados por el PT.

Si la reforma previsional ha constituido, hasta el momento, un éxito inequívoco del Gobierno, no puede decirse lo mismo del programa Hambre Cero. Lanzado con gran alarde, con una operación de marketing político que buscaba movilizar a la sociedad en torno del esfuerzo de erradicación del hambre, el plan enfrentó desde el inicio las contradicciones inscritas en su ambicioso diseño original. El público a ser alcanzado no estaba claro –¿serían los pobres o solamente los desnutridos? El abanico de acciones y la escala de prioridades tampoco fueron definidos³. La articulación entre los diversos ministerios se ha mostrado difícil. El Ministerio de Seguridad Alimentaria ignoró la experiencia acumulada, no solo en la administración anterior sino también en su propio partido⁴, pagando por ello un elevado precio. La implantación fue lenta⁵ y dispendiosa, y los mecanismos establecidos de gestión local ignoran peligrosamente las fronteras entre Gobierno y partido.

Después de nueve meses de resultados mucho más modestos que los esperados, todo indica que el Hambre Cero, en su confusa formulación original, dejará de ser el centro de la acción social del gobierno de Lula. En efecto, el presupuesto de 2004 destina apenas 300 millones de reales (aproximadamente 100 millones de dólares) al Ministerio responsable del programa, contra 1.800 millones de reales (cerca de 600 millones de dólares) destinados en 2003. Por otra

3. El último informe del programa, con fecha 1º de agosto, indica entre las acciones iniciadas y las programadas: distribución de la tarjeta alimentaria, distribución de cestas básicas (de alimentos) para 626 campamentos del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), atención a comunidades indígenas y comunidades quilombolas, creación de existencias mínimas de alimentos adquiridos a las unidades familiares de agricultores, incentivo a la producción y consumo de leche en el Nordeste, banco de alimentos, cursos de alfabetización, construcción de cisternas, etc.

4. La Alcaldía de San Pablo, administrada por el PT, desarrolla un bien diseñado y exitoso programa de transferencia condicionada de ingresos, que atiende un mayor número de familias, en una única ciudad, que el Hambre Cero, en todo el país.

5. Hasta el 5 de septiembre, el programa había incluido 297.242 familias en la tarjeta alimentaria –número menor al alcanzado por el programa de San Pablo, y gastó solamente 8,24% de los cerca de 1.800 millones de reales previstos para ese año.

parte, el Gobierno se prepara para lanzar, este año, un gran programa de transferencia de ingresos dirigido por la Secretaría de Gobierno de la Presidencia. El proyecto resultará de la unificación de cuatro programas de transferencia de ingresos creados por la administración Cardoso, más la tarjeta alimentaria, instituida por el Hambre Cero. Partirá del registro y de la experiencia del gobierno anterior, pero introducirá modificaciones significativas en la forma de gestión y en la amplitud de cobertura. Además de la unificación y de la centralización de los programas en un único ministerio y del establecimiento de cooperación con los estados, se propone alcanzar a todas las familias que reciben 100 reales de ingreso por persona⁶.

Con el lanzamiento del nuevo programa, el Gobierno podrá dar un paso al frente en la experiencia brasileña con acciones de garantía de ingresos destinadas a los sectores más vulnerables. De todos modos, un sistema asistencial más ecuánime y un buen programa focalizado de transferencia de ingresos no son suficientes para implementar una política social. Resultan indispensables buenas políticas de educación y de salud, así como otras especialmente diseñadas para lidiar con los problemas complejos de los grandes centros urbanos. En los primeros nueve meses, el gobierno de Lula anduvo a la deriva en lo referente a las políticas de educación básica y atención a la salud, mientras el nuevo Ministerio de las Ciudades quedó paralizado por falta de recursos. La desorientación fue particularmente aguda en el Ministerio de Educación, incapaz de definir una agenda de trabajo que enfrentara los desafíos del presente, como son la mejoría en la calidad de la educación básica, la expansión, definición de las distintas vocaciones y mejoría en la calidad de la educación media y la educación continua del inmenso contingente de brasileños jóvenes y adultos de bajísima escolaridad. La única iniciativa en el área de educación básica fue el lanzamiento del programa Brasil Alfabetizado, que se propone alfabetizar, hasta 2006, a 18 millones de personas adultas⁷, por medio de convenios con una multiplicidad de ONGs especializadas, que recibirán 15 reales por persona alfabetizada, pero ocurre que desde hace más de una década el analfabetismo, en franco descenso, ha dejado de ser el problema más grave de la educación brasileña. A pesar de las cifras es un fenómeno residual, concentrado en la zona rural y entre los pobladores urbanos más viejos. Su eliminación es una política

6. Habrá una transferencia única y no condicionada de 50 reales para las familias que no alcancen ese valor de renta por habitante, las cuales, junto con las familias con una renta entre 51 y 100 reales, podrán recibir entre 15 y 45 adicionales, según la asistencia de los niños a la escuela, a puestos de salud o la supresión del trabajo infantil.

7. Hay diferencias en relación con esta cifra, para muchos subestimada. El último Censo Escolar registraba poco más de 14,5 millones de analfabetos, con parte significativa de ellos en las zonas rurales.



© 2003 Gerda Fiecher/Nueva Sociedad

necesaria, pero no puede ser la acción prioritaria de un gobierno comprometido con la reforma social. Mucho más importante es garantizar que los niños y adolescentes dejen de ser semianalfabetos cuando concluyen la educación básica, como ocurre hoy en escala muy amplia.

Ocho meses en el Gobierno es muy poco tiempo para evaluar el desempeño de una gestión y menos aún puede servir de base para prever lo que podrán ser los próximos 40 meses. Mudarse de la tribuna al día a día de la administración nunca ha sido simple, y ello requiere de un aprendizaje. Mientras estuvo en la oposición y durante la campaña electoral, el PT podía ignorar que había

una agenda de reforma social en curso y presentar, en sus pronunciamientos públicos, lo mucho que aún faltaba por hacer como prueba de que nada se hacía. Sin embargo, al asumir las responsabilidades de gobierno lo que hizo fue retomar la agenda en lo que respecta a la reforma previsional y a los programas de transferencia de ingresos. Falta aún responder a los nuevos desafíos, instalados después de 15 años de transformaciones en la educación básica y en la atención a la salud, y encontrar soluciones innovadoras para las políticas de vivienda y de infraestructura de las metrópolis. No hay motivos para suponer que el gobierno de Lula no pueda dar cuenta de este desafío.

Bibliografía

- Draibe, Sonia Miriam, Maria Helena G. de Castro y Beatriz Regina Zago de Azeredo: «The System of Social Protection in Brazil», *Democracy and Social Policy Series*, Documento de Trabajo N° 3, Kellogg Institute, Notre-Dame University, 1995.
- Draibe, Sonia: «Políticas Sociais nos anos 90», Cepal, Santiago de Chile, 1999, mimeo.
- García, Reinaldo Coutinho: «Iniquidade Social no Brasil: Uma Aproximação e uma Tentativa de Dimensionamento», *Textos para Discussão*, Ipea / Ministério do Planejamento, Brasília, 2003.
- Instituto Ciudadania: *Projeto Fome Zero. Uma Proposta de Política de Segurança Alimentaria para o Brasil*, Instituto Ciudadania, San Pablo, 2001.
- Ipeadata, 2003, <www.ipea.gov.br>.
- Ministerio da Educação: *Censo Escolar 2001*, <www.mec.gov.br>.
- Ministerio da Fazenda: *Política Econômica e Reformas Estruturais*, Ministerio da Fazenda, Brasília, 2003, <www.fazenda.gov.br>.
- Ministério da Saúde: *Anuário Estatístico de Saúde do Brasil*, 2001, <www.saude.gov.br>.